

INE/CG1223/2021

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN VA FUERTE POR NUEVO LEÓN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ASI COMO DEL C. DAVID DE LA PEÑA MARROQUÍN, ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente número **INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio identificado con el número INE/JLE/NL/UTF-EF/232/2021 signado por el C.P Juan Gilberto Barragán Borges, Encargado del Despacho de Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual acompaña un escrito de queja, signado por el C. Fernando Antonio Hernández Márquez, en su calidad de Representante Propietario ante la Comisión Electoral Municipal de Santiago Nuevo León del C. José Alejandro Reyna Aguilar, en su calidad de entonces Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de Santiago, Nuevo León, en contra del C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, postulado por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 en el estado de Nuevo León. (fojas 1 a 86 del expediente)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito presentado.

“(…)

HECHOS

1.- El día 7 de octubre del 2020, dio inicio el Proceso Electoral ordinario 2020-2021, en el Estado de Nuevo León

*2.- Es un hecho notorio que el ciudadano **David de la Peña Marroquín** el entonces candidato a la renovación de Ayuntamiento en el Municipio de Santiago Nuevo León por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León.*

*3.- Que el ciudadano **David de la Peña Marroquín**, en sus eventos y recorridos por el Municipio de Santiago Nuevo León con motivo de su campaña electoral, repartió una cantidad estratosférica de artículos utilitarios de propaganda política electoral los cuales constan de playeras, camisas, camisetas de diferentes colores, rompe vientos, cubrebocas, mandiles, calcomanías, microperforados, gorras, bolsas, revistas, flayers, banderas, banderines publicitario y demás artículos promocionales de campaña, aunado a esto, también gasto en renta de locales, restaurantes, alimentos proporcionados en eventos, equipos de sonido, renta de toldos, macro pantallas, mobiliario (sillas), escenario, juegos pirotécnicos, batucada, grupo musical, comediante y todo lo que implica la realización de este tipo de eventos.*

Para robustecer lo anterior adjunto imágenes con la fecha y el enlace de cada publicación que el entonces candidato subió a su página oficial en la red social Facebook durante los eventos y recorridos de su campaña electoral.

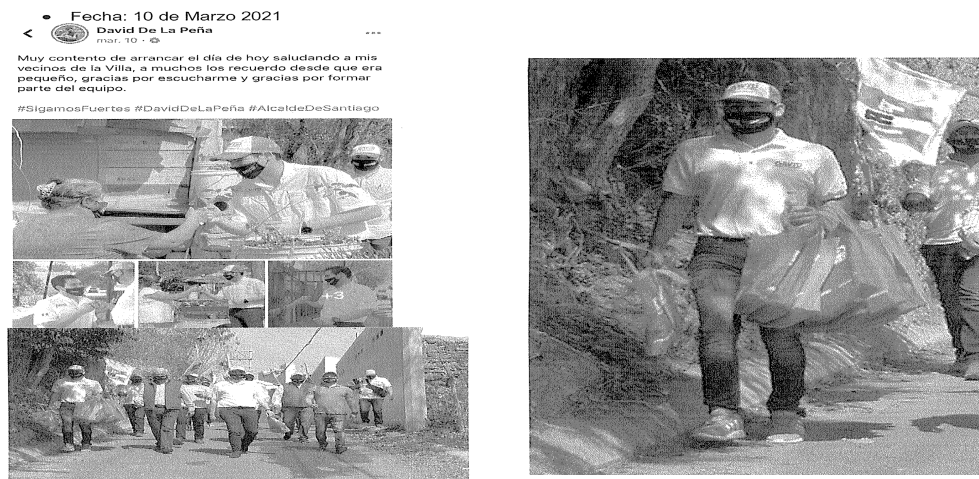
En estas imágenes se pueden observar un sin número de artículos promocionales, como lo son playeras, cubrebocas, mandiles, calcomanías, microperforados, gorras, bolsas, revistas, flayers, banderas, banderines publicitarios.

Ejemplos de imágenes y links:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL



Enlace: <https://facebook.com/DDLPM/posts/4474161459277599>



Enlace de la publicación:
<https://facebook.com/DDLPM/posts/4476004959093249>

En estas imágenes podemos observar que además de todos los artículos promocionales anteriormente descritos, también contaron con batucada y pantalla gigante, aunado a gran cantidad de vehículos que participaron en la caravana al finalizar el debate, los cuales deber ser contabilizados como gastos de campaña.

[Se insertan imágenes]
<https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4485072164853195>

(...)

En estas imágenes se aprecian mobiliario (sillas) con el logo de la campaña de la campaña del ciudadano David de la Peña Marroquín.

[Se insertan imágenes]

En estas imágenes se muestra un evento realizado con motivo del día del maestro, en el cual es evidente la entrega de artículos promocionales, alimentos, renta del local y demás gastos que se pudieran generar por la realización de esta actividad.

[Se insertan imágenes]

• **FECHA 2 DE JUNIO DE 2021**

Cierre de campaña, en la plaza principal de Santiago Nuevo León, en el cual se contó con comediante, escenario, juegos pirotécnicos y grupo musical.

[Se insertan imágenes]

En las imágenes de las publicaciones hechas por el entonces candidato David de la Peña Marroquín, se puede deducir que se incurrió en un conjunto de gastos los cuales deben ser debida y totalmente reportados, ya que de las imágenes podemos observar que es un claro exceso de gasto de campaña en propaganda y publicidad.

4.- También se puede apreciar en distintos puntos del Municipio de Santiago Nuevo León una cantidad exagerada de bardas con el fin de alentar el apoyo de la campaña electoral, de las cuales se debió llevar una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda electoral, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo cumplir en su caso, con lo dispuesto en el Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente y deberán conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.

Para sustentar lo anterior, se presentan una serie de fotografías de algunas de las bardas anteriormente referidas adjuntando la ubicación de cada una de ellas:

[Se insertan imágenes]

5.- Es importante señalar que aunado a todo el material publicitario descrito en los puntos anteriores también se observan panorámicos con propaganda electoral del entonces candidato por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León en la Carretera Nacional, siendo esta un emblema del municipio por la gran cantidad de personas que la visitan diariamente, debido a que cuenta con locales de venta de diferentes productos. Dichos panorámicos debieron cumplir con los requisitos que marca el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización el cual menciona que durante las actividades de operación ordinaria, obtención de ciudadano, precampaña y campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como las empresas propietarias o concesionaria, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño , manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las facturas originales correspondientes, con la información siguiente:

(...)

[Se insertan imágenes]

(...)

PRUEBAS:

En términos de lo previsto en el artículo 465 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ofrezco como de mi intención las pruebas siguientes:

INSPECCIÓN TECNICA OCULAR: *Que se hace consistir en la inspección que se realice accediendo a las ligas electrónicas relacionadas con las actividades precisadas en este escrito. Esta prueba está relacionada y se comprueba las actividades realizadas en la campaña y publicadas por la parte denunciada en su red social Facebook.*

INSPECCIÓN TECNICA OCULAR: *Que se hace consistir en la inspección que se realice a la fotografías y ubicaciones de los panorámicos.*

INSPECCIÓN TECNICA OCULAR: *Que se hace consistir en la inspección que se realice a las fotografías y ubicaciones de las lonas de gran tamaño.*

DOCUMENTAL VIA INFORME: Consistente en el informe que debe presentar David de la Peña Marroquín en el que demuestre cada uno de los gastos generados por todas las actividades que realizó a lo largo de su campaña incluyendo la pinta de bardas, lonas de gran tamaño y los panorámicos y si estos fueron informados a la autoridad fiscalizadora. Con esta prueba se demuestra si todos los gastos fueron debidamente reportados.

DOCUMENTAL VIA INFORME: Consistente en el informe que debe presentar ciudadano David de la Peña Marroquín en el que muestre los permisos de la colocación de las lonas de gran tamaño especificadas en el punto 6 de los hechos descritos en el presente escrito. Con esta prueba se demuestra si cuenta con los permisos correspondientes para la colocación de las lonas de gran tamaño.

PRESUNCIONAL: En su doble aspecto, legal y humana en lo que favorezca a mis intereses.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Que se hace consistir en todo lo que actúe en el presente procedimiento en cuanto favorezca mis intereses.

(...)"

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.

- 46 links de la pagina de la red social de Facebook con captura de pantalla de las publicaciones que se desprenden de ellos.
- 31 fotografías de bardas con geo-referencia y domicilio.
- 5 fotografías de panorámicos con geo-referencia, ID-INE y domicilio.
- 19 fotografías de lonas con geo-referencia y domicilio.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número **INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL**, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, asimismo, notificar y emplazar a los sujetos incoados. (fojas 87-88 del expediente)

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.

a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 91-92 del expediente)

b) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (fojas 93 -94 del expediente)

V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio de dos mil veinticinco, mediante oficio INE/UTF/DRN/31714/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del procedimiento de mérito. (fojas 95 -96 del expediente)

VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31715/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito.(fojas 97 – 99 del expediente)

VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. José Alejandro Reyna Aguilar, entonces Candidato Independiente a la Presidencia Municipal De Santiago, Nuevo León.

a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31734/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2169/2021, al C. José Alejandro Reyna Aguilar, entonces Candidato Independiente a la Presidencia Municipal De Santiago, Nuevo León el inicio del procedimiento de mérito. (fojas 100 a 103 del expediente)

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C. José Alejandro Reyna Aguilar, no presentó respuesta al emplazamiento.

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento Partido Revolucionario Institucional

a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31746/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2171/2021 al Partido Revolucionario Institucional la admisión del procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se le emplazó corréndole traslado con las constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (fojas 104 a 113 del expediente)

b) Mediante oficio número SFA/472/2021 presentado con fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el C.P Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez Secretario de Finanzas y Administración del CEN del PRI dio contestación al requerimiento referido mismo que de conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización se transcribe a continuación en su parte conducente:

“(…)

Por este medio le informo que el requerimiento antes señalado, fue turnado al Comité Directivo Estatal en dicho Estado para su atención directa, por lo que será quien responda en tiempo y forma.

(…)”

(Foja 147 del expediente)

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática

a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31745/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2173/2021 al Partido de la Revolución Democrática la admisión del procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se le emplazó corréndole traslado con las constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (fojas 114 a 123 del expediente)

b) Mediante escrito presentado con fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno el Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio contestación al requerimiento referido mismo que de conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización se transcribe a continuación en su parte conducente:

“(…)

CONTESTACIÓN DE HECHOS

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes Jurisprudencias:

Partido Revolucionario Institucional

Vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 67/2002

QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS, REQUISITOS DE ADMISION DE LA DENUNCIA.

Partido Acción Nacional

Vs.

Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas

Jurisprudencia 16/2011

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MINIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD.

Rodolfo Vitela Melgar y otros

Vs.

Tribunal Electoral del Distrito Federal
Jurisprudencia 36/2014

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCION PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSATANCIAS QUE SE PRETENDE DEMOSTRAR.

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealdad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral ese en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia se debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, es presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

*Es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se utilizaron en la campaña del **C. David de la Peña Marroquín, candidato a la Presidencia Municipal de Santiago, estado de Nuevo León**, postulado por la Coalición “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN” integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, tal y como se acreditará con la información que en su oportunidad remita el Partido Revolucionario Institucional a esa autoridad fiscalizadora, en cumplimiento al emplazamiento que fue objeto.*

*En este sentido, se informa que conforme al convenio de coalición “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN”, se determinó que la candidatura a la **Presidencia Municipal de Santiago, estado de Nuevo León**, la postularía el Partido Revolucionario Institucional, por ende, dicho instituto político es quien cuenta con los insumos contables en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, en los que se realizó el reporte de los gastos denunciados, para que sean remitidos a esa Unidad técnica de Fiscalización.*

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y sana crítica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

(...)”

(fojas 148 a 157 del expediente)

X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento C. David De La Peña Marroquín

a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31733/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2170/2021 al C. David de la Peña Marroquín la admisión del procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se le emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, así

como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (fojas 114 a 123 del expediente)

b) Mediante escrito recibido con fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, el entonces candidato denunciado C. David De La Peña Marroquín dio respuesta al emplazamiento, por lo que de conformidad con el artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, dicha contestación en su parte conducente establece:

“(…)

HECHOS

8. *El denunciante parte de argumentos sin sustentos y fundamentos jurídicos en su denuncia.*

9. *Ya que después de adjuntar una serie de fotografías y de ligas electrónicas el denunciante argumenta principalmente, que en mi campaña electoral supuestamente se “repartió una cantidad estratosférica de artículos utilitarios de propaganda política electoral los cuáles constan playeras, camisas, camisetas de diferentes colores, rompe vientos, cubrebocas, mandiles, calcomanías, microperforados, gorras, bolsas, revistas, flayers, banderas, banderines publicitarios y demás artículos promocionales de campaña, aunado a esto, también gasto en renta de toldos, macro pantallas, mobiliario.*

10. *Toda vez que sin bases sólidas realiza declaraciones como por ejemplo en su página 51, en el primer párrafo el cuál transcribimos a continuación.*

En las imágenes de las publicaciones hechas por el entonces candidato David de la Peña Marroquín, se puede deducir que se incurrió en un conjunto de gastos los cuales deben ser debida y totalmente reportados, ya que de las imágenes podemos observar que es un claro exceso de gastos de campaña en propaganda electoral y publicidad.

11. *Sin embargo su escrito de denuncia se encuentra con grandes inconsistencias y además de carecer indebidamente de los **requisitos mínimos** para que el procedimiento se pueda sustanciar.*

12. *Debido a que el denunciante realiza manifestaciones imprecisas, ambiguas, carentes de toda fundamentación jurídica y de algún rastro de racionalidad.*

13. *Toda vez que, sin precisar realmente solo invoca una serie de utilería que se usa en cualquier evento, sin embargo en ninguna parte de su escrito precisa*

cantidades, cualidades o algún elemento mínimo en el cual se pueda observar alguna conducta a investigar, sustanciar y contestar de alguna posible infracción.

14. *Ésta H. Autoridad debe considerar improcedente la denuncia que plantea el denunciante, toda vez que resulta imprecisa y vaga los hechos denunciados.*

15. *Es por ello que, no es posible advertir elementos siquiera indiciarios de una posible falta a la normatividad electoral y no argumenta otro medio más lo que él según argumenta existe en la red social Facebook.*

16. *Esto es, como se establecen en los presentes alegatos, no se advierten elementos que permitan para el juzgador hacer valer las aseveraciones realizadas por el denunciante.*

17. *Siendo además indispensable que el denunciante muestre estos elementos probatorios, ya que este tiene la carga de probar sus inconformidades vertidas en su escrito de denuncia, esto de conformidad con la jurisprudencia 12/2010, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro **CARGA DE LA PRUEBA, EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.***

18. *Se debe tener que las denuncias deben estar sustanciadas en hechos claros y precisos en los cuáles se expliquen en circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se según la parte actora sucedieron y aportar el mínimo material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios, **o que no existan como es el caso concreto.***

19. *En este sentido, se tiene que al ser una denuncia o queja contra el suscrito se debe de precisar cuáles son los actos que intenta imputarme, toda vez que al ser una situación de justicia se necesita más atención por parte de los denunciantes y valorar más el actuar de los juzgadores y del propio juzgado.*

20. *En efecto, la Sala Superior conforme al cual la parte denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar las pruebas que se sustentan su denuncia.*

21. *Asimismo, los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, a los aportados por las mismas y la decisión del órgano judicial se debe limitar a lo alegado y probado por las partes.*

22. *Así las cosas, a diferencia del proceso inquisitorio, en el proceso dispositivo, la litis es claramente cerrada y vaga por lo que en el caso concreto el juzgador está impedido para modificar o ampliar la Litis a partir de esos elementos.*

(...)

(Fojas 166 a 171 del expediente)

XI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Institucional Nacional Electoral.

a) En fecha veintisiete de junio de dos mil veintiuno esta Unidad, mediante oficio INE/UTF/DRN/32024/2021, solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva Del Instituto Nacional Electoral la certificación de información relacionada con la existencia de links de la red social de Facebook del candidato denunciado. (fojas 130 a 133 del expediente)

b) El doce de julio dos mil veintiuno, se recibió el oficio número INE/DS/2000/2021, mediante el cual se acompañó el acta circunstanciada INE/DS/OE/374/2021, por la que se certificó la existencia y contenido de cuarenta y seis páginas de internet o links publicados en la red social Facebook del candidato denunciado. (fojas 220 a 285 del expediente).

c) En fecha veintisiete de junio de dos mil veintiuno esta Unidad, se solicito a la Lic. Daniela Casar García, Directora Del Secretariado De La Secretaría Ejecutiva Del Instituto Nacional Electoral por medio de oficio INE/UTF/DRN/32033/2021 la certificación de información relacionada con la existencia de bardas a nombre del candidato incoado, ubicados según advierte el quejoso, en el municipio de Santiago, Nuevo León. (fojas 134 a 146 del expediente)

d) El treinta de julio del dos mil veintiuno, se recibió por medio de la Junta Distrital Ejecutiva 09 Nuevo León, el Acta Circunstanciada identificada como INE/JDE9/OE/CIRC/002/2021, correspondiente a la solicitud de fe de hechos respecto de la información relacionada con la existencia de propaganda electoral por concepto de 31 bardas, ubicadas en diferentes partes del municipio de Santiago, Nuevo León.

XII. Solicitud de información al C. José Francisco Sampogna Garza Servicios Comerciales Rojo.

a) Mediante acuerdo de colaboración de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno esta Unidad, solicitó el auxilio de las labores de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León a efecto de que por su conducto se requiriera al C. José Francisco Sampogna Garza Servicios Comerciales Rojo a efecto de que proporcionara toda información y documentación referente a la contratación de servicios por concepto

de pinta de propaganda electoral en bardas, en beneficio del Partido Revolucionario Institucional y entonces candidato el C. David De La Peña Marroquín.

XIII. Razones y constancias.

a) Mediante razón y constancia de fecha veintisiete de junio del año en curso, se hizo constar la búsqueda en relación al reporte de diario y mayor de la contabilidad general del C. David De La Peña Marroquín, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del municipio de Santiago, Nuevo León postulado por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” integrado por los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

b) Mediante razón y constancia de fecha veintisiete de junio del año en curso, en relación a la rendición de cuentas del C. David De La Peña Marroquín, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del municipio de Santiago, Nuevo León postulado por la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” integrado por los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se localizó información relativa al periodo de campaña obteniendo ingresos y egresos totales.

c) Mediante razón y constancia de fecha veintinueve de junio del año en curso, en relación a la contabilidad por conceptos consistentes en bardas, localizando la póliza 1 normal de diario periodo 1 del entonces candidato el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León.

d) Mediante razón y constancia de fecha once de julio del dos mil veintiuno del año en curso, en relación a la contabilidad por conceptos consientes en evento del día del maestro referente a contrato de comediante y templete, localizando la póliza 1 normal, egresos, periodo 3 del entonces candidato el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León.

e) Mediante razón y constancia de fecha once de julio del dos mil veintiuno del año en curso, en relación a la contabilidad por conceptos consientes en evento de partido político del día 11 de abril del 2021, localizando la póliza 10 normal, egresos, periodo 2 del entonces candidato el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León.

f) Mediante razón y constancia de fecha once de julio del dos mil veintiuno del año en curso, en relación a la contabilidad por conceptos consientes en lonas,

localizando la póliza 8, normal, egresos, periodo 3 del entonces candidato el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León.

g) Mediante razón y constancia de fecha once de julio del dos mil veintiuno del año en curso, en relación a la contabilidad por conceptos consientes en utilitarios referente a mandiles localizando la póliza 2, normal, egresos, periodo 2 del entonces candidato el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León.

h) Mediante razón y constancia de fecha once de julio del dos mil veintiuno del año en curso, en relación a la contabilidad por conceptos consientes en textiles, lonas, material editorial localizando la póliza 8, normal, egresos, periodo 2 del entonces candidato el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León.

XIV. Acuerdo de Alegatos

El trece de julio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera.

a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33405/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/4138/2021 al C. José Alejandro Reyna Aguilar el inicio de la etapa de alegatos a efecto de que en el término legal de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera.

Con fecha quince de julio de dos mil veintiuno, el C. Fernando Antonio Hernández Márquez, Representante del C. José Alejandro Reyna Aguilar, presentó los alegatos que le convinieron los cuales se encuentran glosados en el procedimiento que por esta vía se resuelve.

b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33403/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/4136/2021 al Partido Revolucionario Institucional el inicio de la etapa de alegatos a efecto de que en el término legal de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

c) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34874/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/4137/2021 al Partido de la Revolución Democrática el inicio de la etapa de alegatos a efecto de que en el término legal de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera.

Con fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, el Lic. Ángel Clemente Ávila Romero, Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó los alegatos que le convinieron los cuales se encuentran glosados en el procedimiento que por esta vía se resuelve.

d) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33404/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/4135/2021 al C. David de la Peña Marroquín el inicio de la etapa de alegatos a efecto de que en el término legal de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera.

e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución ninguno de los sujetos involucrados presentó escrito de alegatos.

XV. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente

XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión extraordinaria, celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; así como 25, 27, 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si la Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, omitieron reportar en el informe de campaña diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 en el estado de Nuevo León.

En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos incoados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, 55, numeral 1; 56, numeral 2, inciso b); 79, numeral 1, inciso b), fracción

I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 104, numeral 2; 121, numeral 1, 127, 216 y 377 del Reglamento de Fiscalización.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña;

(...)”

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíben financiar a los partidos políticos;

(...)”

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

(...)"

"Artículo 55.

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

(...)"

"Artículo 56.

(...)

2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:

(...)

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos;

(...)"

"Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(...)"

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 96.

Control de los ingresos

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

(...)"

"Artículo 104.

Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y candidatos

(...)"

2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.

Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral, deberán comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aportante.

(...)"

"Artículo 121.

Entes impedidos para realizar aportaciones

1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:

- a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos.*
- b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.*
- c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.*
- d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.*
- e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.*
- f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.*
- g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.*
- h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.*
- i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.*
- j) Las personas morales.*
- k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o previamente registradas.*
- l) Personas no identificadas.*
- (...)"*

"Artículo 127.

Documentación de los egresos

- 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*
- 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*
- 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,*

en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

Artículo 216.

Bardas

1. Los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes, llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda electoral, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato, y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en el Reglamento respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte correspondiente.

2. Deberán conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta.

(...)

Artículo 377.

Comprobación de gastos de propaganda en bardas

1. Los gastos de propaganda en bardas deberán ser reportados con:

a) Facturas expedidas por lo proveedores o prestadores de servicios.

b) Contrato en el que se establezcan las obligaciones y derechos de ambas partes,

el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubiere comprometido.

c) Relación que detalle la ubicación y las medidas exactas de las bardas utilizadas, especificando los datos de la autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de obra utilizados, la identificación de los candidatos.

d) Fotografías de la publicidad utilizada en bardas.

2. Los pagos realizados para estos conceptos deberán efectuarse con cheque o transferencia de una cuenta bancaria.

(...)"

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General de este Instituto.

Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio

del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al tope establecido para tal efecto.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Ahora bien, por cuanto hace al artículo 25 numeral 1 inciso i) en relación al artículo 54 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulneraría la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral.

El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos

de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa electoral.

Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que permite precisamente la fiscalización.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.

La normativa electoral indica que **los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente** para los fines por los que fueron entregados; es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para

sufragar gastos de precampaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional, estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Así, la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de precampaña.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que si de la revisión a las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad electoral determina gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a las reglas determinadas en dicho precepto normativo, con la finalidad de no establecer un valor sin sustento legal y contable que pudiera tomarse como desproporcional y nugatorio.

En este sentido, de los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1, 55, numeral 1; 56, numeral 2, inciso b); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 104, numeral 2; 121, numeral 1, 127, 216 y 377 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos realizados, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis de la totalidad de los conceptos denunciados y la presunción del rebase de tope de gastos de campaña que a dicho del quejoso, constituyen una omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto obligado señalado respecto de la rendición de cuentas conforme a la norma de la totalidad de los gastos y el tope de gastos de campaña establecidos por el Consejo General de este Instituto en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León.

Origen del procedimiento.

El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio identificado con el número INE/JLE/NL/UTF-EF/232/2021 signado por el C.P Juan Gilberto Barragán Borgues, Encargado del Despacho de Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual acompaña un escrito de queja, signado por el C. Fernando Antonio Hernández Márquez, en su calidad de Representante Propietario ante la Comisión Electoral Municipal de Santiago Nuevo León del C. José Alejandro Reyna Aguilar, en su calidad de entonces Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de Santiago, Nuevo León, en contra del C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, postulado por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 en el estado de Nuevo León.

En el escrito de queja, se denuncian gastos derivados de la presunta celebración de eventos y recorridos por el Municipio de Santiago Nuevo León con motivo de campaña electoral del entonces denunciado, en los que aparentemente repartió artículos utilitarios de propaganda política electoral los cuales constan de playeras, camisas, camisetas de diferentes colores, rompe vientos, cubrebocas, mandiles,

calcomanías, microperforados, gorras, bolsas, revistas, flayers, banderas, banderines y demás artículos promocionales de campaña, aunado a esto, también denuncia gasto en renta de locales, restaurantes, alimentos proporcionados en eventos, equipos de sonido, renta de toldos, macro pantallas, mobiliario (sillas), escenario, juegos pirotécnicos, batucada, grupo musical, comediante y todo lo que implica la realización de este tipo de eventos; aunado a lo anterior, se pronuncia respecto de la omisión en el reporte de bardas, lonas y panorámicos en beneficio del entonces candidato denunciado.

Como medio de prueba a sus aseveraciones, el quejoso aporta un total de cuarenta y seis links de la red social Facebook, de los cuales se desprenden diversos gastos que a decir del quejoso no fueron reportados por el entonces candidato, así como 31 fotografías impresas de bardas, 19 fotografía impresas de lonas y 5 fotografías de panorámicos los cuales vincula con una dirección y una geo-referencia, además de adjuntar el INE-ID de los panorámicos objeto de denuncia y que supuestamente no fueron reportados en la contabilidad del denunciado.

En consecuencia, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido, acordándose admitir a trámite y sustanciación el procedimiento administrativo sancionador de queja, registrar el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL** en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización; y notificar y emplazar a los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, además, al C. David de la Peña Marroquín, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Santiago, en Nuevo León.

En cumplimiento a lo acordado en el proveído en comento, se procedió a efectuar cada una de las respectivas notificaciones al Secretario Ejecutivo de este Consejo General y a la Presidenta Consejera de la Comisión de Fiscalización, así como se efectuaron los emplazamientos respectivos a cada una de las partes denunciadas.

Por lo que una vez conocidos los elementos que integran el expediente de mérito, mediante escrito de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional señaló que el oficio de emplazamiento fue turnado al Comité Directivo Estatal en dicho Estado para su atención directa, por lo que sería dicho comité quien respondería en tiempo y forma.

Asimismo, en contestación al emplazamiento notificado por esta autoridad, el Partido de la Revolución Democrática señaló que, los hechos denunciados a todas

lucen devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que los hechos denunciados por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara ni proporcionan circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.

Por su parte el C. David De La Peña Marroquín, señaló en su escrito de contestación al emplazamiento que, los hechos denunciados parten de argumentos sin sustentos y fundamentos jurídicos, Toda vez que sin bases sólidas realiza declaraciones, se encuentra con grandes inconsistencias y además carece indebidamente de los requisitos mínimos para que el procedimiento se pueda sustanciar.

Ahora bien, toda vez que se denuncia el presunto gasto por artículos utilitarios de propaganda electoral derivado de direcciones electrónicas y con la finalidad de recabar todos los elementos que permitieran a esta autoridad emitir un pronunciamiento fundado y motivado, el veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se solicitó a la Directora del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que remitiera certificación y contenido de los links publicados en la red social Facebook del entonces candidato denunciado.

Por lo anterior mediante oficio INE/DS/2000/2021 de fecha nueve de julio se recibió por medio de la Dirección del Secretario el Acta Circunstanciada identificada como INE/DS/OE/CIRC/395/2021, correspondiente a la solicitud de fe de hechos respecto de la información relacionada con la existencia y contenido de cuarenta y seis páginas de internet, mediante la cual se certificó la existencia y contenido de las de cuarenta y seis páginas denunciadas.

De igual manera el veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la certificación de información relacionada con la existencia de bardas a nombre del candidato incoado, ubicadas, a decir del quejoso, en el municipio de Santiago, Nuevo León, expidiéndose para tal efecto el Acta Circunstanciada identificada como INE/JDE9/OE/CIRC/002/2021, correspondiente a la solicitud de fe de hechos respecto de la información relacionada con la existencia de propaganda electoral por concepto de 31 bardas, ubicadas en diferentes partes del municipio de Santiago, Nuevo León.

Asimismo, en su obligación oficiosa de investigación, esta autoridad requirió al C. José Francisco Sampogna Garza Servicios Comerciales Rojo, con la finalidad de

que proporcionara toda información y documentación referente a la contratación de servicios por concepto de pinta de propaganda electoral en bardas, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y su representado, en beneficio del entonces candidato, el C. David De La Peña Marroquín.

De igual manera, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó una búsqueda en el Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización, levantando razón y constancia del total de ingresos y egresos en la contabilidad del C. David De La Peña Marroquín, los cuales consistieron en ingresos por un monto de **\$505,911.59** (quinientos cinco mil novecientos once pesos 59/100 M.N.) y egresos por la cantidad de **\$481,080.67** (cuatrocientos ochenta y un mil ochenta pesos 67/100 M.N.).

Por último, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó diversas búsquedas dentro los “Reportes de Diario y Mayor” en la contabilidad del entonces denunciado a efecto de conciliar los hallazgos del SIF, con los conceptos denunciados levantando razón y constancia de cada una de dichas búsquedas.

Valoración de las pruebas.

Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos denunciados y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas.

Como ya fue mencionado anteriormente, las pruebas con las que el quejoso pretende acreditar la conducta presumiblemente imputable al entonces candidato son las denominadas técnicas, mismas que constan de un total cuarenta y seis links de la red social Facebook, 31 fotografías impresas de bardas, 19 fotografías impresas de lonas y 4 fotografías de panorámicos los cuales se desprenden diversos gastos que a dicho del quejoso no fueron reportados por el entonces candidato denunciado.


a) Documentales públicas:

- Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/395/2021, del expediente INE/DS/OE/374/2021, la cual consiste en la certificación de links denunciados por el quejoso.
- Acta Circunstanciada número INE/JDE9/OE/CIRC/002/2021, del expediente INE/DS/OE/374/2021, la cual consiste en la certificación de bardas aportados por el quejoso.
- Razones y constancias de los hallazgos localizados en el SIF por parte de esta autoridad.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

Que, al ser documentos expedidos por una autoridad, en pleno ejercicio de sus funciones en términos del artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se consideran como documentales públicos y, por lo tanto, tienen valor probatorio pleno.

b) Pruebas técnicas:

 **Direcciones electrónicas:** Cuarenta y seis enlaces electrónicos de las redes sociales Facebook, de los cuales a dicho del quejoso se desprenden todos y cada uno de los conceptos denunciados, mismos que se enlistan a continuación para pronta referencia:

NO.	LINK
1	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4474161459277599
2	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4476004959093249
3	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4485072164853195
4	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4484433324917079
5	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4491346684225743
6	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4493378067355938
7	https://www.facebook.com/DDLPM/photos/a.1024743840886062/4506413522719059/
8	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4511185875575157
9	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4511842182176193
10	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4516895195004225
11	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/45184654581805352
12	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4538041079556303
13	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4540878275939250
14	https://www.facebook.com/DDLPM/photos/pcb.4541350562558688/4541350429225368/
15	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4542986362395108
16	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4543891475637930
17	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4549681751725569
18	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4559196754107402
19	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4561916803835397
20	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4566021270091617
21	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4568095129884231
22	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4571096262917451
23	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4572560736104337
24	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/45623123587714718
25	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4625974280762982
26	https://www.facebook.com/DDLPM/posts/4626236260736784
27	www.facebook.com/1024697394224040/post/4635403989820011/?_rdc=1&_rdr
28	www.facebook.com/1024697394224040/post/4640555102638233/?_rdc=1&_rdr
29	www.facebook.com/1024697394224040/post/4647231381970605/?_rdc=1&_rdr
30	www.facebook.com/1024697394224040/post/4656778737682536/?_rdc=1&_rdr

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

NO.	LINK
31	www.facebook.com/1024697394224040/post/4657054290988314/?_rdc=1&_rdr
32	www.facebook.com/DDLP/post/46597415940582917
33	www.facebook.com/1024697394224040/post/4659722730721470/?_rdc=1&_rdr
34	www.facebook.com/1024697394224040/post/4675384135821996/?_rdc=1&_rdr
35	www.facebook.com/DDLP/post/46597415940582917
36	www.facebook.com/1024697394224040/post/4659722730721470/?_rdc=1&_rdr
37	www.facebook.com/1024697394224040/post/4675384135821996/?_rdc=1&_rdr
38	https://www.facebook.com/1024697394224040/post/4676817555678654/?_rdc=1&_rdr
39	www.facebook.com/1024697394224040/post/4679850738708669/?_rdc=1&_rdr
40	www.facebook.com/1024697394224040/post/4685360681491008/?_rdc=1&_rdr
41	www.facebook.com/1024697394224040/post/4697375820289494/?_rdc=1&_rdr
42	www.facebook.com/1024697394224040/post/4703669436326799/?_rdc=1&_rdr
43	www.facebook.com/1024697394224040/post/4706538942706515/?_rdc=1&_rdr
44	www.facebook.com/1024697394224040/post/4725029854190757/?_rdc=1&_rdr
45	www.facebook.com/DDLP/post/4726393744054368
46	https://www.facebook.com/DDLPM/photos/pcb.4745376718822737/4745370632156679/

Por lo antes descrito es que esta autoridad no tiene la certeza para establecer las condiciones cualitativas y cuantitativas de los conceptos denunciados, en relación con los medios de prueba aportados por el quejoso.

Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores¹ relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:

- Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.
- Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.

¹ De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.

- Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
- Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el acceso a la información por parte de la ciudadanía². Así pues, mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.

Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido³ que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas.

Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como

² Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.

³ A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.

herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.

En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.

Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:

- Tiempo, fechas en que subió la imagen.
- Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
- Lugar, los referidos en la red social.

Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.

Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:

- Día, hora y ubicación de la realización del acto.
- Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la que se realiza la publicación.
- Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la publicación primigenia.
- Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro usuario desde la publicación original.

De lo anterior, se desprende que la temporalidad y ubicación de un acto no necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se

realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.

Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.

Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la identidad.

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, es decir, el contenido de la red social.

En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.

Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña en su escrito de queja, y que como ya fue mencionado se encuentran soportados con una dirección electrónica, los presenta con una serie de inconsistencias, como la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el quejoso pretende acreditar conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades:

- a. No se observan de manera clara los conceptos que son denunciados.

- b. No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además de que el quejoso no presenta un total por cada concepto denunciado.
- c. No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso.
- d. No se presenta el modo exacto de cómo fue repartida esa propaganda.
- e. No se puede establecer el beneficio y/o la relación directa con la campaña del otrora candidato.

Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva de manifestar ideas escritas o transmitir imágenes por dicho medio con la finalidad de obtener reacciones en general.

Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica⁴, toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa como lo son eventos públicos y caminatas casa por casa, así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate.

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como

⁴ De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.

En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,⁵ entre ellos:

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes:

(...)

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.

(...).”

[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba obligado a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para

⁵ El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo General el 16 de diciembre de 2015.

evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.

En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado

Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada.

Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la investigación. Por lo que el quejoso aporta pruebas en las cuales no se efectuó una revisión independiente respecto del contenido y veracidad de la información proporcionada, por lo tanto, el análisis y resultados podrían verse afectados en caso de que dicha información no sea correcta y/o precisa; es decir, se pronuncia sobre la falta de veracidad de su dicho.

Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en direcciones electrónicas donde aparecen videos e imágenes tienen el carácter de pruebas técnicas, de las cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma que se transcribe a continuación:

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter

imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, por lo que no dan cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados.

En esta tesitura, las pruebas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que el partido y su candidato denunciado, hayan sido omisos en el reporte de gastos, y como consecuente hubiesen actualizado un rebase en el tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Nuevo León.

Imágenes de propaganda en vía pública

Con el objeto de acreditar la existencia de 31 bardas ⁶, 19 lonas y 5 panorámicos, que a dicho del quejoso, beneficiaron a la campaña del C. David De La Peña Marroquín y no fueron reportados en la contabilidad de los incoados, situación que actualizaría un rebase de tope de gastos de campaña; el quejoso ofreció un cúmulo de imágenes en los que se visualizan elementos tales como fotografías de las presuntas lonas, bardas y panorámicos denunciadas, tipo, geo localización, domicilio, haciendo énfasis que para su localización señaló la latitud y longitud que a dicho del quejoso proporcionaba la ubicación de la propaganda denunciada, así como en el caso de los panorámicos, remitió el ID-INE respectivo, como se puede observar a continuación

⁶ El número total de lonas y bardas denunciadas se obtiene del conteo hecho a las imágenes anexas a la queja, en los cuales se establece si se trata de una lona o una barda.

MUESTRAS DE LA EVIDENCIA PRESENTADA POR CONCEPTO

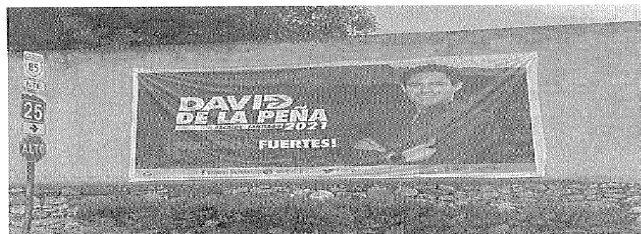
- Carretera Ciudad Victoria-Monterrey, colonia Bosques de las lomas.



- Carretera Ciudad Victoria-Monterrey, colonia el Cercado.
Número identificación: INE-RNP-000000309926



1. Antiguo camino a villa de Santiago, colonia las jaras, entre carretera ciudad Victoria-Monterrey y Antiguo Camino a Villa de Santiago.



Al respecto, se hace hincapié en que dichos elementos constituyen pruebas técnicas que, de conformidad con el artículo 15, numeral 1, fracción III, 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, son considerados de carácter técnico y

tienen un valor indiciario y solamente harán prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado.

En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las circunstancias que pretenden ser probadas, situación que no satisface la quejosa en el escrito de queja presentado.

Robustece lo anterior, lo referido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, mediante la cual estableció que las pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud que la normatividad electoral las define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral; por consiguiente, la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción correspondiente.

Es por ello que, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como sucede con las ahora materia de análisis), deben contener la descripción clara y detallada de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y las mismas deben guardar relación con los hechos que pretende acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.

Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la autoridad electoral.

Apartado A. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la existencia, se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Apartado B. Conceptos denunciados de los cuales no se tiene certeza de la existencia.

Apartado C. Propaganda electoral exhibida en vía pública.

C.1 Lonas

C.2 Espectaculares y

C.3 Bardas

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

Apartado A. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

El quejoso denuncia la realización de diversos actos de campaña del C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León postulado por que la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León ya que a su dicho, derivado de éstos se desprendieron gastos que se debieron reportar a la autoridad tales como playeras, camisas, camisetas de diferentes colores, rompe vientos, cubrebocas, mandiles, calcomanías, microperforados, gorras, bolsas, revistas, flayers, banderas, banderines publicitario y demás artículos promocionales de campaña, aunado a esto, también denunció omisión de reporte por gastos de renta de locales, restaurantes, alimentos proporcionados en eventos, equipos de sonido,

renta de toldos, macro pantallas, mobiliario (sillas), escenario, juegos pirotécnicos, batucada, grupo musical, comediante y todo lo que implica la realización de este tipo de eventos.

Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía información precisa de la ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza de que los gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco era posible mediante las solas imágenes y direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía información en la que constaran los lugares en los que se encontraba la propaganda, solo argumentaciones genéricas.

En este sentido, aún y cuando las pruebas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, carecen de valor probatorio pleno por lo que no generan certeza de la existencia de los hechos denunciados, en atención al principio de exhaustividad esta autoridad se pronunciará sobre aquellos hechos donde advierte la existencia de diversos egresos por parte del candidato denunciado, en relación a los conceptos por playeras, camisetas de diferentes colores, rompe vientos, cubrebocas, mandiles, calcomanías, microperforados, gorras, bolsas, revistas, flyers, banderas, banderines y demás artículos promocionales de campaña, aunado a esto, también gasto en renta de locales, restaurantes, alimentos proporcionados en eventos, equipos de sonido, renta de toldos, macro pantallas, mobiliario (sillas), escenario, juegos pirotécnicos, batucada, grupo musical, comediante y todo lo que implica la realización de este tipo de eventos.

Es menester señalar que, como quedó asentado en el apartado de valoración de pruebas, éstas fueron consistentes en fotografías, videos y ligas electrónicas de la red social Facebook, ofrecidas por el quejoso, lo cual constituye la calificación de pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

En síntesis, es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas, con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

tiempo y lugar. En otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

En consecuencia y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, se ingresó a la contabilidad 73239, perteneciente al entonces candidato incoado en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos respecto de los conceptos que fueron reportados y que son coincidentes con los que el quejoso denuncia.

Derivado de lo anterior, en la contabilidad del entonces candidato referido, se encontraron los registros de gastos reportados, de conformidad con la siguiente tabla:

No.	UNIDADES	ARTÍCULOS O SERVICIOS CONTRATADOS	REFERENCIA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA
1	1	Comediante	PN5/EG-3-27/05/2021	EVENTOS POLITICOS, DIRECTO. CONTRATACION DE ANIMACION (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE)
2	1	Evento Templete Sonido Bebidas no alcohólicas	PN10/EG-2/03/052021	EVENTO DE PARTIDO POLITICO
3	500 500 8 4	Mandiles Cubrebocas Banderines Coroplast	PN2/EG-2/12/04/2021	UTILITARIOS
4	1	Cantantes Grupo Musical	PN4/ING-3/02/06/2021	APORTACION EN ESPECIE DE MILITANTE PARA EVENTO DEL CIERRE DE CAMPAÑA DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 PRORRATEO CON CON CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO 26 Y CANDIDATO A GOBERNADOR
5	1	Batucada Pantalla Móvil	PN7/EG-30/04/2021	SERVICIO DE BATUCADA Y PANTALLA MOVIL POR 3 HORAS PARA EL EVENTO DEL 25 DE ABRIL 2021 CELEBRADO POSTERIOR AL DEBATE

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

No.	UNIDADES	ARTÍCULOS O SERVICIOS CONTRATADOS	REFERENCIA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA
6	20 1000	Camisas Volantes(flayers)	PN7/EG- 3/28/05/2021	UTILITARIOS
7	1	Toldo	PN2/ING- 3/01/06/2021	APORTACION EN ESPECIE DE MILITANTE PARA EVENTO DEL CIERRE DE CAMPAÑA DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 PRORRATEO CON CANDIDATO A DIPUTADO DISTRITO 26 Y CANDIDATO A GOBERNADOR
8	500 500 100 450 37 400 100	Playeras Bolsas Gorras Calcomanías Banderas Vinilonas Microperforados	PN4/EG- 3/31/05/2021	UTILITARIOS
9	1	Escenario	PN1/EG- 3/31/05/2021	EVENTOS POLITICOS, DIRECTO. TEMplete Y ESCENARIOS
10	1	Alimentos	PN1/EG- 3/24/05/2021	APORTACION DE MILITANTES EN EFECTIVO. CAMPAÑA
11	N/A	Revistas	PN2/EG-01-05- 2021	CHEQUE NO 018 UTILITARIOS (MATERIAL DE EDITORIAL) LONAS Y TEXTILES

En esta tesitura, en términos de los artículos 20, numeral 1 y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razones y constancias respecto de la información obtenida para allegarse de los elementos necesarios para la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, por lo que, al tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera.

Por lo tanto, derivado de las búsquedas realizadas en el Sistema Integral de Fiscalización se constató que los conceptos de mérito, mismos que dieron origen a

la queja que aquí se constriñe, fueron reportados y de igual forma cumplen con los requerimientos establecidos en los artículos 37 bis y 38 del Reglamento de Fiscalización.

En ese orden de ideas, se determinó con base en la documentación obtenida en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, que en cuanto se refiere a los conceptos advertidos de las pruebas presentadas por el denunciante, aun cuando las mismas no generan valor probatorio pleno que genere certeza de la existencia de los hechos, estos se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, con la documentación soporte que ampara el gasto, en donde se encuentra la póliza y la factura correspondientes, así como las evidencias, por lo que no se vulneró el principio de legalidad.

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se concluye lo siguiente:

- Que se denunció la existencia de varios conceptos de gasto que a dicho del quejoso derivaron de la celebración de diversos eventos a lo largo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León en beneficio del C. David de la Peña Marroquín.
- Que las pruebas con las que el quejoso pretendió acreditar su dicho son catalogadas como pruebas técnicas, las cuales no generan certeza de la existencia de los hechos, por los razonamientos vertidos en la valoración de las pruebas de la presente Resolución.
- Que no obstante lo anterior, esta autoridad con el fin de atender el principio de exhaustividad y de perfeccionar la prueba, realizó una búsqueda en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, obteniendo como resultado que el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, postulado por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, cuenta con el reporte de algunos de los conceptos motivo de disenso.
- Que, existe reporte por los conceptos de playeras, camisas, camisetas de diferentes colores, cubrebocas, mandiles, calcomanías, microperforados, gorras, bolsas, flyers, revistas, banderas, banderines, alimentos

proporcionados en eventos, equipos de sonido, renta de toldos, macro pantallas, escenario, batucada, grupo musical y comediante, dentro del Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad del C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, postulado por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Bajo esa tesitura, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas por el quejoso, los denunciados y de las que se allegó esta autoridad fiscalizadora en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra investida; hacen prueba plena que la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León no vulneraron lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y n), 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127, del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara **infundado** el apartado de mérito.

No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro de los conceptos enunciados en el presente apartado, esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna infracción con respecto a la documentación soporte que amparen las operaciones realizadas, el registro de operaciones en tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley con motivo del registro de los conceptos antes mencionados, los mismos serán determinados, de ser el caso, en el Dictamen Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento de revisión de los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 en el estado de Nuevo León.

APARTADO B. Conceptos denunciados de los cuales no se tiene certeza de la existencia.

Como ya quedó asentado previamente, el quejoso denuncia la celebración de actos de campaña de los cuales según su dicho fueron erogados gastos por diversos conceptos, que no fueron reportados por que la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León, mismos

que únicamente vincula con imágenes fotográficas, teniendo carácter de pruebas técnicas o no presenta evidencia alguna, lo cual de ninguna manera genera certeza sobre la veracidad o existencia de dichos actos, siendo éstos los siguientes:

Conceptos
Renta de locales
Restaurantes
Fuegos Pirotécnicos
Rompe-vientos
Mobiliario (sillas)

Ahora bien, como ha quedado establecido en el capítulo de valoración de pruebas de la presente Resolución, el denunciante presentó en copia simple, diversas imágenes en blanco y negro que, de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes subidas al perfil del entonces candidato denunciado y como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, es específico en la red social denominada “Facebook.

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las imágenes, argumentado que de ellas se advierten los gastos por los conceptos objeto de estudio del presente apartado; sin embargo, el quejoso no muestra con suficiente claridad la relación existente entre los conceptos denunciados y las pruebas con las que pretende soportarlos, toda vez que en cuanto al concepto denunciado por concepto por renta de locales, restaurantes, rompe-vientos, revistas y fuegos artificiales no presenta prueba alguna que permita a esta autoridad trazar una línea de investigación en aras del perfeccionamiento de la misma.

Es menester señalar que del análisis al escrito de queja presentado, se advierte que contenía en su mayoría argumentos que de manera genérica refieren infracciones en materia electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso, implicarían en un rebase de gastos de campaña por parte del denunciado.

Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio.

Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o jurídico con el alcance probatorio que el quejoso pretende darle a las fotografías y videos que integran el acervo probatorio de referencia.

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del material probatorio.

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las imágenes, argumentando que de ellas se advierte los posibles gastos no reportados, mismos que se actualizarían a un rebase de tope de gastos denunciado, sin embargo, no muestra con suficiente claridad la relación existente entre los conceptos denunciados y las pruebas con los que pretende soportarlos, toda vez que como ya se había mencionado anteriormente, únicamente presenta imagenes en blanco y negro y direcciones electrónicas.

De la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se tiene lo siguiente:

- Que las pruebas aportadas por el quejoso, por el concepto de renta de locales restaurantes, fuegos pirotécnicos, rompe-vientos y mobiliarios, por los argumentos vertidos anteriormente, son catalogados como pruebas técnicas los cuales no generan certeza de la existencia de los hechos.
- Que las pruebas aportadas por el quejoso no cuentan con datos suficientes que permitan acreditar datos de ubicación exacta, fecha de repartición y/o existencia de los conceptos, sin permitir que esta autoridad cuente con elementos que le permitan investigarlos.

- Que, por todos los razonamientos anteriormente vertidos, no se tiene certeza de la existencia de los hechos por lo cual no se actualiza la obligación a los sujetos incoados de reportarlos en el Sistema Integral de Fiscalización.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando de mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de la existencia de los hechos dado que el quejoso pretendió acreditarlos únicamente mediante pruebas técnicas, esta autoridad no tiene certeza plena de la existencia por lo tanto, a otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática , así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León, no vulneraron lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y n), 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127, del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara **infundado** el procedimiento de queja objeto de estudio, por cuanto hace al presente apartado.

Apartado C. Propaganda electoral exhibida en vía pública

C.1 Lonas

El quejoso, aduce en el escrito de queja hechos que a su juicio podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en la omisión de reportar conceptos consistentes en **Lonas**, ubicadas en diferentes ubicaciones del municipio de Santiago, Nuevo León.

Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó las pruebas que se enlistan a continuación:



➤ Impresiones fotográficas de Lonas

De los elementos probatorios aportados en el escrito de queja, se aprecian las pruebas técnicas (de la especie fotografías) las cuales ostentan eficacia probatoria indiciaria, resultando imperativa la necesidad de adinricularlas con elementos de convicción adicionales a fin de incrementar la certeza de existencia requerida. Dicha acreditación de existencia representa un primer presupuesto básico elemental, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen,


CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014⁷.

Es por ello que esta autoridad se dio a la tarea de analizar cuantos diseños se encontraban entre las 19 lonas objeto de estudio del presente apartado, desprendiéndose al efecto las siguientes:

Imagen muestra por diseño	Diseño de lona
	Se observa al entonces candidato cruzado de brazos, su nombre, cargo al que contiene y el lema ¡SIGAMOS FUERTES! Y sus redes sociales.
	Se observa al entonces candidato con cubrebocas rodeado de personas al fondo, su nombre, cargo al que contiene y el lema "SIGAMOS X UN RUMBO SEGURO, VOTA FUERTE ESTE 6 DE JULIO"

A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos denunciados materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos reportados por el entonces candidato denunciado dentro de su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo que existe el registro de la totalidad de gastos denunciados por el quejoso por concepto de lonas, como se detalla a continuación:

ID	Conceptos denunciados	Concepto registrado	Unidades reportadas	Póliza	Evidencia
1	Lonas ¡Sigamos Fuertes, Hagamos Equipo!	Lonas	2	Póliza Normal, Diario, Número 3 periodo de operación 3, con fecha de operación 12/04/2021	

⁷ **PRUEBAS TÉCNICAS.** SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

ID	Conceptos denunciados	Concepto registrado	Unidades reportadas	Póliza	Evidencia
2	Lonas Candidato con paisaje de NL detrás, 2021.	Lonas	13	Póliza Normal, Egresos, Número 4 periodo de operación 1, con fecha de operación 31/03/2021	
3	Lonas "Sigamos x un rumbo seguro, Vota Fuerte"	Lonas	8	Póliza Normal, Diario, Número 8 periodo de operación 3, con fecha de operación 01/06/2021	  
4	Lonas "¡Sigamos Fuertes!"	Lonas	8	Póliza Normal, Diario, Número 8 periodo de operación 2, con fecha de operación 01/05/2021	

Como se desprende del cuadro que antecede, el C. David de la Peña Marroquín, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Santiago, Nuevo León, realizó el registro de propaganda en vía pública, específicamente por cuanto hace a las **lonas** indicadas en el escrito de queja.

En razón de lo anterior, de los elementos de prueba ofrecidos, del análisis de las pólizas registradas por el sujeto obligado, se desprende que éste presentó contratos, cheques, facturas, y muestras de las lonas que coinciden con los diseños denunciados, que se desahogaron en términos de ley, probanzas que concatenadas entre sí, permiten acreditar fehacientemente que las lonas materia del presente procedimiento, se encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización; por lo que la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática , así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León, no incumplieron con la normativa electoral, al estar registrado un mayor número de lonas que el denunciado.



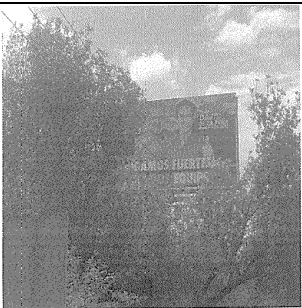
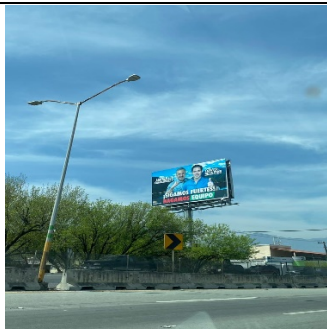
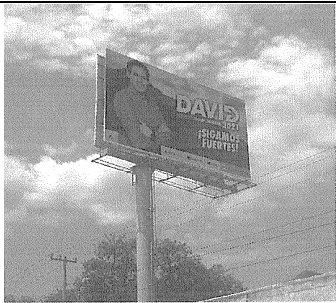

b) Espectaculares

En el presente apartado se analizará el concepto denunciado por la presunta omisión de reportar gastos por concepto de espectaculares en beneficio del C. David de la Peña Marroquín, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del municipio de Santiago, Nuevo León, postulado por la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León” integrada por los Partidos Revolucionario Institucional

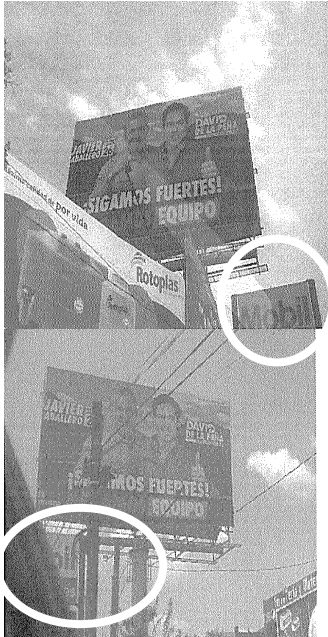
Del escrito de queja se advierte que presenta como prueba un total de cinco imágenes, de las que brinda domicilios incompletos, por lo que **no existe evidencia clara de las características propias de los hallazgos como lo son, el que el ID INE que refiere se pueda comprobar con la fotografía, ya que las imágenes tienen poca claridad.**

No obstante lo anterior, aun y cuando las pruebas aportadas por el quejoso no generan certeza de los conceptos denunciados, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, se ingresó a la contabilidad del C. David de la Peña Marroquín, con ID 73239, en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos de reporte encontrados:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

No.	Imágenes denuncia	Espectaculares denunciados	Reporte el SIF	Evidencia
1		Carretera Ciudad Victoria- Monterrey, Colonia el Cercado INE-RNP- 000000309926	PN6/EG-1- 01/04/2021	
2		Carretera Ciudad Victoria- Monterrey, Colonia el Cercado INE-RNP- 000000309936	PN6/EG-1- 01/04/2021	
3		Carretera Ciudad Victoria- Monterrey, Colonia Boca Palma INE-RNP- 0000003280605	PN4/EG-2- 05/04/2021	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

No.	Imágenes denuncia	Espectaculares denunciados	Reporte el SIF	Evidencia
4		Carretera Ciudad Victoria- Monterrey, Colonia Boca Palma INE-RNP- 000000265276	PN5/EG-1- 31/03/2021*	

*Como puede observarse en las fotografías, dos de los espectaculares presentados por el quejoso fueron tomados de diversos ángulos para pretender acreditar más conceptos de los que realmente existen, tomando como referencia el local de Mobil que se observa tanto en las dos imágenes presentadas por el quejoso, como en la muestra que se reportó por el entonces denunciado.

Como puede observarse en la tabla que antecede, esta autoridad a pesar de la ilegibilidad de los elementos de prueba, localizó el total de espectaculares denunciados, mismos que fueron debidamente reportados en la contabilidad del sujeto incoado. Por lo anterior es que esta autoridad con base en los elementos con los que cuenta, tiene certeza del registro de espectaculares, dentro de la contabilidad del sujeto incoado.

Derivado de lo expuesto, se menciona que de la valoración de cada uno de los elementos que se obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, y los cuales fueron concatenados entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo siguiente:

- Que, se denuncia un total de cinco espectaculares colocados en vía pública, con propaganda electoral del entonces candidato el C. David de la Peña Marroquín, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del municipio

de Santiago, Nuevo León, postulado por la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León” integrada por los Partidos Revolucionario Institucional.

- Que, de las 5 imágenes proporcionadas por el quejoso, al ser analizadas por esta autoridad, se tiene que solamente se trata de 4 espectaculares diferentes, ya que dos de las fotografías fueron tomadas al mismo espectacular desde ángulos diferentes.
- Que, de la contabilidad del C. David de la Peña Marroquín, se desprenden reportes por concepto de propaganda de cuatro espectaculares, siendo coincidentes con los cuatro denunciados por el quejoso, tal y como se advierte del estudio hecho en el presente apartado.

En razón de lo anterior, de los elementos de prueba ofrecidos, del análisis de las pólizas registradas por el sujeto obligado, se desprende que éste presentó contratos, cheques, facturas, y muestras de los cuatro espectaculares, mismos que coinciden con los denunciados, que se desahogaron en términos de ley, probanzas que concatenadas entre sí, permiten acreditar fehacientemente que los espectaculares materia del presente procedimiento, se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización; por lo que la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León, no incumplieron con la normativa electoral.

c) Bardas

Ahora bien, por lo que corresponde al concepto denunciado por **pinta de bardas**, a efecto de dar claridad al universo de bardas denunciadas y verificadas por la oficialía electoral mediante acta de verificación identificada como INE/JDE9/OE/CIRC/002/2021 de la Dirección del Secretariado, se desglosan los siguientes números:

Concepto	Cantidad
Denunciadas	31
Advertidas por Oficialía Electoral	31

Concepto	Cantidad
Bardas localizadas por la Oficialía Electoral que se encuentran pintadas de color blanco	18
Bardas localizadas por la Oficialía Electoral que cuentan con propaganda electoral en favor del C. David de la Peña Marroquín	13

De acuerdo al contenido del acta de verificación identificada como INE/JDE9/OE/CIRC/002/2021 de la Dirección del Secretariado, se advirtieron 18 bardas de las 31 visitadas, que en sus características y su contenido no se desprende elemento o vínculo alguno con la campaña del entonces candidato, tal y como se advierte en las siguientes imágenes de muestra:



Es así que, como puede advertirse de las imágenes muestra plasmadas en el cuadro que antecede, esta autoridad concluye que de 18 bardas, no se tiene certeza de que hayan beneficiaron de manera alguna a la campaña del entonces candidato el C. David de la Peña Marroquín, al no contener vínculo alguno con el cual se acredite propaganda electoral del denunciado.





Ahora bien, de acuerdo al contenido del acta de verificación identificada como INE/JDE9/OE/CIRC/002/2021 de la Dirección del Secretariado, se advirtió la existencia de 13 bardas de las 31 visitadas por la autoridad electoral, con contenido electoral a favor del C. David de la Peña Marroquín, de las cuales se advierte que

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

contienen el nombre del entonces denunciado, así como el cargo al cual se postulaba.

Es por lo anterior que, se procedió con base a las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, a revisar los asientos contables de las bardas denunciadas de las cuales se advierte la existencia de la mismas, dentro del portal del Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos relativos respecto de los conceptos que se advierten de las probanzas que las quejas aportan, específicamente en cuanto a la documentación referente a los registros contables.

Una vez dentro del Sistema Integral de Fiscalización, se realizó una búsqueda en la contabilidad del entonces candidato incoado a efecto de localizar las bardas denunciadas, bajo el número de ID 73239, arrojando los siguientes resultados:

IMAGEN EXTRAÍDA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	SIF			EVIDENCIA
	PÓLIZA	PERIODO	TIPO - SUBTIPO	
	1	1	Normal – Egreso	
	1	1	Normal – Egreso	

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

IMAGEN EXTRAÍDA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	SIF			EVIDENCIA
	PÓLIZA	PERIODO	TIPO - SUBTIPO	
	1	1	Normal – Egreso	





Es así que, después de valorar los hallazgos del SIF, se encontraron solo 3 de las dieciocho bardas con propaganda electoral a favor de la campaña del entonces candidato el C. David de la Peña Marroquín, de las que la Dirección del Secretariado dio fe de su existencia.

Es así que, por lo que de acuerdo a la visita realizada por la oficialía electoral existen 10 bardas de las cuales se encuentra acreditada su existencia y de las que no se cuenta con registro contable, las cuales se detallan a continuación:

No .	No. En Acta	IMAGEN EXTRAÍDA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	Metros cuadrados
1	3		3.5 metros de largo ⁸ por 2 metros de ancho	7 mts ²




⁸ El número de metros cuadrados asentado corresponde a la media, en virtud de que comparte la pinta con diverso sujeto.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

No.	No. En Acta	IMAGEN EXTRAIDA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	Metros cuadrados
2	6		8 metros de largo ⁹ por 2 metros de ancho	16 mts ²
3	12		5 metros de largo por 2 metros de ancho	10 mts ²
4	13		8 metros de largo por 2 metros de ancho	16 mts ²
5	16		3 metros de largo por 2.50 metros de ancho	7.5 mts ²

⁹ El número de metros cuadrados asentado corresponde a la media, en virtud de que comparte la pinta con diverso sujeto

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

No.	No. En Acta	IMAGEN EXTRAIDA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	Metros cuadrados
6	17		6 metros de largo por 2 metros de ancho	12 mts ²
7	20		3.5 metros de largo por 2 metros de ancho	7 mts ²
8	22		3.5 metros de largo ¹⁰ por 2 metros de ancho	7 mts ²

¹⁰ El número de metros cuadrados asentado corresponde a la media, en virtud de que comparte la pinta con diverso sujeto

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

No.	No. En Acta	IMAGEN EXTRAIDA DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTA DE VERIFICACIÓN	Metros cuadrados
9	24		5 metros de largo ¹¹ por 2 metros	10 mts ²
10	31		8 metros de largo por 3 metros de ancho	24 mts ²
		Total		116.5 mts²

Es así que, bajo esta tesitura, y de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de mérito, esta autoridad electoral cuenta con certeza de la existencia de **10** bardas que contienen propaganda en beneficio del C. David De La Peña Marroquín, situación que consta en documentales públicas asentadas en el acta de verificación, asimismo, que de la revisión de la contabilidad de entonces candidato en el Sistema Integral de Fiscalización no se advirtieron reportes contables por pinta de las bardas con las características antes señaladas, por lo tanto, el sujeto obligado vulneró lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara **parcialmente fundado** el apartado objeto de estudio.

Determinación del costo

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,

¹¹ El número de metros cuadrados asentado corresponde a la media, en virtud de que comparte la pinta con diverso sujeto

así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹²

Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.

- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de

¹² 7 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

Por lo anterior se consultó la Matriz de Precios derivada de la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos Asociaciones Políticas y Otros a fin de estar en condiciones de determinar el valor unitario de los conceptos denunciados para determinar el costo que pudo representar la omisión del reporte de egresos por las diez bardas en favor del C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Santiago Nuevo León, postulado por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, resultando lo siguiente:

ID MATRIZ	PROVEEDOR	PROCESO	ÁMBITO	ENTIDAD	CONCEPTO	NÚM. FACTURA /COTIZACIÓN/ID DEL RNP/FOLIO FISCAL	VALOR POR mt ² CON IVA
106815	Comercializadora Organización y Negocios González, S.A. DE C.V.	Campaña 2020 - 2021	Local	Nuevo León	Barda	7A376B9E-84EE- 1A49-B804- 7FD156FE0F1E	\$69.60

De la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio Instituto Nacional Electoral, se advierte que para conocer el valor real del concepto denunciado consistente en diez bardas sin registro en el sistema Integral de Fiscalización, se tomaron en cuenta los datos más relevantes para arribar al monto que el sujeto incoado erogó y no reportó a este instituto, incumpliendo así con la normatividad electoral en materia de fiscalización, por ende se realiza la siguiente operación para arribar al monto involucrado:

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

CONCEPTO	CANTIDAD	METROS ² OMITIDOS DERIVADOS DE ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD	COSTO UNITARIO MATRIZ DE PRECIOS POR METRO CUADRADO	RESULTADO
Bardas	10	116.5 mts ²	\$ 69.60	\$ 8,108.40

Es así que la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, omitió reportar el egreso por concepto de la pinta de 10 bardas en beneficio del C. David De La Peña Marroquín, por un importe de **\$8,108.40 (ocho mil ciento ocho pesos 40/100 M.N.)**.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Toda vez que en este apartado se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta
- d) La trascendencia de las normas transgredidas
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)
- h) Capacidad económica del ente infractor.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.

Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**apartado A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**apartado B**).

A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

Con relación a la irregularidad identificada en el presente apartado, se identificó que la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León omitió reportar los gastos realizados por concepto de diez bardas en beneficio del C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Santiago, en el estado de Nuevo León, en el informe de campaña de los ingresos y gastos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Nuevo León.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.¹³

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron.

La otrora coalición Va Fuerte por Nuevo León omitió reportar en el informe de campaña, gastos inherentes a la pinta de diez bardas contraviniendo lo dispuesto

¹³ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

en los artículos 79, numeral 1, inciso a) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el procedimiento que por esta vía se resuelve.

c) Comisión intencional o culposa de la falta

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación

de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente¹⁴:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
- La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de

¹⁴ Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016.

los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

Ahora bien, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos¹⁵ y 127 del Reglamento de Fiscalización¹⁶.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los

¹⁵ Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: (...) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente (...)

¹⁶ “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en una **falta de resultado** que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia)

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

h) Capacidad económica del denunciado

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento de fiscalización, cuenten con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción, que en su caso, se le imponga, pues por cuanto hace al **Partido Revolucionario Institucional** recibió financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CEE/CG04/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal de Nuevo León, en sesión especial celebrada el once de diciembre de dos mil veinte, el monto siguiente:

Acuerdo	Instituto Político	Financiamiento público para actividades ordinarias 2021
CEE/CG04/2021	Partido Revolucionario Institucional	\$46,253,039.99

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias¹⁷.

¹⁷ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, es importante mencionar a los partidos políticos que cuentan con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de julio de 2021	Montos por saldar	Total
Partido Revolucionario Institucional	PES-284/2021	\$ 4,481.00	\$	\$ 4,481.00	\$ 4,481.00
Partido Revolucionario Institucional	PES-325/2021	\$ 4,481.00	\$	\$ 4,481.00	\$ 4,481.00
Partido Revolucionario Institucional	PES-395/2021	\$ 4,481.00	\$	\$ 4,481.00	\$ 4,481.00
Morena	PES-412/2021	\$ 4,481.00	\$	\$ 4,481.00	\$ 4,481.00
Partido Revolucionario Institucional	PES-378/2021	\$ 4,481.00	\$	\$ 4,481.00	\$ 4,481.00

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Por otro lado, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el ámbito federal y local, por lo que en atención al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes

para afrontar las sanciones correspondientes, como acontece en el caso del **Partido de la Revolución Democrática**.

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias¹⁸.

Así, respecto a los citados institutos políticos, toda vez que cuentan con registro nacional y acreditación local, para efectos de la presente Resolución, debe considerarse que cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo INE/CG573/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, los montos siguientes:

Partido Político	Financiamiento público actividades ordinarias 2021
Partido de la Revolución Democrática	\$414,382,572.00

Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a **los partidos políticos con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional**, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional. Por lo que hace a la **capacidad económica de los partidos políticos que recibieron financiamiento público estatal**, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará por la autoridad electoral local.

Ahora bien, cabe señalar que en el marco del Proceso Electoral Local Concurrente 2020-2021 en el estado de Nuevo León se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición para contender a diversos cargos de elección, para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente, se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.

Coalición “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN”

¹⁸ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León mediante Acuerdo CEE/CG/83/2020, determinó la procedencia del convenio de coalición parcial denominada “Nuevo León Adelante” para postular a las candidaturas a la elección de Gubernatura del estado de Nuevo León y la elección de Diputados Locales en veintiséis Distritos electorales y la renovación de cuarenta y nueve ayuntamientos el estado de Nuevo León.

Posteriormente, el cinco de febrero de dos mil veintiuno el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León mediante Acuerdo CEE/CG/065/2021 fue resuelta la solicitud de modificación del Convenio de Coalición Parcial denominada “Nuevo León Adelante” para ahora denominarse “Va Fuerte por Nuevo León”.

En el convenio de coalición se determinó en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA, la forma en la que se individualizarían las sanciones en caso de infracciones:

“(…) DÉCIMA SEGUNDA. SANCIONES.

Para el caso de las sanciones impuestas por incumplimiento, error u omisión, en donde la conducta sea imputable a un candidato o candidata, partido político o su militancia, el partido político responsable deberá cubrir el 100% de sanción. En caso de que la responsabilidad se atribuya a la Coalición, cada Partido Político asumirá las responsabilidades que se deriven en proporción al monto de financiamiento que aporte a la campaña de que se trate.”

No obstante, lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones, considerando para tal efecto **el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición.**

Partido político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de Aportación	Aportación (A)	Total (B)	Porcentaje de sanción $C=(A*100)/B$
PRI	\$23,126,520.00	100%	\$23,126,520.00	\$23,628,473.75	97.88%
PRD	\$1,673,179.16	30%	\$501,953.75		2.12%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’**¹⁹.

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados señalado en el cuadro que antecede, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de la siguiente forma:

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor claridad se transcribe a continuación:

“(…)

*Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido apelante, **éste también es responsable de la comisión de las infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador** y conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al **celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es***

¹⁹ Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128.

compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra en apartado posterior.

(...)

*En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la fiscalización, **porque como se analizó el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados en esta materia.***

*De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó **las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda la coalición.***

(...)”

[Énfasis añadido]

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA.**

B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.²⁰

²⁰ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al **Partido Revolucionario Institucional** en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **inciso h)** del presente considerando, **denominado “Capacidad económica de los denunciados”** de la presente Resolución los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración que el **Partido de la Revolución Democrática** no cuenta con financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso Electoral local precedente, en este orden de ideas es idóneo considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del partido político derivada del financiamiento público federal para actividades ordinarias²¹, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **inciso h)** del presente considerando, **denominado “Capacidad económica de los denunciados”** de la presente Resolución los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en

²¹ Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público de un sujeto obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar los egresos consistentes en la pinta de veinte bardas durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto incoado consistió en no reportar los gastos realizados por concepto de 10 pintas de bardas durante la campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como las obligaciones durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado asciende a **\$8,108.40 (ocho mil ciento ocho pesos 40/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.²²

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en las citadas fracciones II y III consistente en una **multa** de hasta diez mil unidades de medida y actualización (antes días de salario mínimo vigente) y **una reducción de la ministración mensual del financiamiento público** que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, a saber **\$8,108.40 (ocho mil ciento ocho pesos 40/100 M.N.)**, lo que da como resultado total la cantidad de **\$8,108.40 (ocho mil ciento ocho pesos 40/100 M.N.)**.

Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido político integrante de la **Coalición “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN”**, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Revolucionario Institucional** en lo individual, lo correspondiente al **97.88%** (noventa y siete punto ochenta y ocho por ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$7,936.50 (siete mil novecientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual, lo correspondiente al **2.12%** (dos punto doce por ciento) del monto total de la sanción,

²² Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **1 (una) Unidad de Medida y Actualización vigente para el año dos mil veintiuno**, equivalente a **\$89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

3. Cuantificación de gastos.

Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.

Sin embargo, de la revisión dentro del Sistema Integral de Fiscalización a la fecha de elaboración del presente procedimiento se advierte, el no rebase al tope de gastos por el candidato denunciado.

Es por ello que una vez determinado el monto al que asciende la irregularidad de la especie *egreso no reportado*, la cantidad involucrada correlativa, se advierte a continuación:

Candidato	Cargo	Postulante	Monto susceptible de sumatoria
C David De La Peña Marroquín	Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León	Colación Va Fuerte por Nuevo León, integrado por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática	\$8,108.40

Asimismo, se ordena acumular el monto consistente en **\$8,108.40** (ocho mil ciento ocho pesos 40/100 M.N.). al tope de gastos de campaña del C. David De La Peña

Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, postulado por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020.-2021 en la entidad federativa en cita.

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras finales del informe del sujeto obligado y, en su caso, si se actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.

4. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad

electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. - Se declara **infundado** el procedimiento de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León, en los términos del **considerando 2, Apartados A y B** de la presente Resolución.

SEGUNDO. - Se declara parcialmente **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como el C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato para el cargo de Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León, en los términos del **Considerando 2, Apartado C** de la presente Resolución.

TERCERO. - Se impone al **Partido Revolucionario Institucional** una reducción del **25%** (veinticinco por ciento) de la ministración mensual, por concepto de Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$7,936.50 (siete mil novecientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.)**., en los términos del **Considerando 2, Apartado C.**

CUARTO. - Se impone al **Partido de la Revolución Democrática** una multa que asciende a **1 (una)** Unidad de Medida y Actualización vigente para el año dos mil veintiuno, equivalente a **\$89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 M.N.)**., en los términos del **Considerando 2, Apartado C.**

QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que se acumule el monto de **\$8,061.80** (ocho mil sesenta y un pesos 80/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña del C. David De La Peña Marroquín, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Santiago, postulado por la Coalición Va Fuerte por Nuevo León integrada por los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, de conformidad con lo expuesto en **Considerando 3**, de la presente Resolución.

SEXTO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos interesados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el **Considerando 4** de la presente Resolución.

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por su conducto remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto Electoral del Estado de Nuevo León, para el efecto siguiente:

a) Que proceda al cobro de la sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional, la cual se hará efectiva a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dichas sanciones económicas sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables.

OCTAVO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la multa determinada al Partido de la Revolución Democrática, se restará de las ministraciones de gasto ordinario del partido político, conforme a lo determinado en la presente Resolución; el recurso obtenido por la aplicación de la misma será destinada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado estado.

NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/869/2021/NL

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**